

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de abril de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : SANDRA VICTORIA SIERRA ESCOBAR
DEMANDADO : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES
LITISCONSORCIO NECESARIO: PORVENIR S.A.
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-025-2021-00047-01
RADICADO INTERNO : 066-23
DECISIÓN : ADICIONA, ORDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO : 092

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

De conformidad con el poder especial otorgado por la Dra. JUAN PABLO ARANGO BOTERO (en calidad de representante legal de PROTECCIÓN S.A.), a la Dra. LAURA LÓPEZ ÁLVAREZ para que represente los intereses de PROTECCIÓN S.A.; y de conformidad con el poder especial otorgado por la Dra. SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO (en calidad de representante legal de la sociedad PORVENIR S.A.), a la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.; y el certificado de existencia y representación de la sociedad en mención, en el que se certifica que *“Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de*

2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a: ... Karen Sofía Sánchez González” por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 74 y 75 del CGP se le reconoce personería, por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 74 y 75 del CGP se les reconoce personería.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita, se DECLARE la nulidad de la afiliación al fondo privado AFP PROTECCIÓN S.A. Se entienda la afiliación al Régimen de Prima Media sin solución de continuidad.

Se le ORDENE a la sociedad PROTECCIÓN S.A el traslado a Colpensiones, del saldo de la cuenta de ahorro individual, incluyendo los rendimientos financieros producidos.

Se le ordene a Colpensiones a aceptar el ingreso o traslado al Régimen de Prima Media y reciba los aportes que debe trasladarle PROTECCIÓN S.A. Se condene a la accionada al pago de las costas procesales.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 11 de junio de 1973 y su primera cotización se realizó en 1994; labora desde agosto de 1994; la demandante ha estado vinculada inicialmente a PORVENIR S.A. y posteriormente a través de la AFP PROTECCIÓN S.A.; en virtud de lo establecido en el art. 13 de la Ley 100 de 1993 la demandante realizó las consultas de la conveniencia del traslado, y se enteró que era mejor estar en Colpensiones y lo prometido por la sociedad PROTECCIÓN S.A no sería alcanzable, por las condiciones económicas más desfavorables; en enero de 2020 inició los trasmites para el estudio del traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, dado que el 11 de junio de 2020 cumplía años y entraba en el parámetro de los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional; el 22 de enero de 2021, le solicitó a PROTECCIÓN S.A doble asesoría, la cual recibe telefónicamente el 7 de marzo de 2020, con la recomendación del traslado a Colpensiones en virtud

de la sustancial diferencia que existiría entre la mesada pensional que otorga cada uno de los regímenes, frente al mismo promedio de cotización. El 22 de enero de 2020 le solicitó a Colpensiones asesoría para el estudio pertinente de su situación pensional y así poder tomar la mejor decisión en relación al traslado; en respuesta dada por Colpensiones el 26 de febrero de 2020, manifestó que había tratarlo de ubicarlo sin poder ubicarlo telefónicamente; el 4 de marzo de 2020, hizo presencia en las instalaciones de Colpensiones sin poder obtenerse asesoría necesaria; ante la emergencia sanitaria, se imposibilitó adelantar el trámite de la asesoría por parte de Colpensiones; en mayo de 2020, se comunicó telefónicamente con Colpensiones y el operador le informa que debía llenar un formulario por la página habilitada sin correo confirmatorio de la presentación del trámite.

Pese a los múltiples intentos de Comunicación, no fue posible obtener por parte de Colpensiones, respuesta debidamente documentada sobre la solicitud del trámite; el 24 de marzo de 2021, le solicitó a Colpensiones indicara el estatus de su solicitud de asesoría para traslado de régimen efectuada en enero de 2020 y ratificada mediante formularios presentados por la página en junio de 2020; indicara las razones por las cuales no se ha dado respuesta sobre la solicitud de asesoría, remitiera copia integral del expediente; en comunicación del 26 de marzo de 2021, Colpensiones dio respuesta informando que la condición para proceder el traslado de regímenes se debía brindar una doble asesoría. A pesar de haber solicitado la doble asesoría la demandante, no fue posible que Colpensiones cumpliera con esa obligación. Con la negación de traslado y demostrándose el perjuicio y el error causado por PROTECCIÓN S.A. quien omitió su deber de asesoría y buen consejo, es por lo que solicita se declare la anulación por error de la afiliación y traslado a Colpensiones con las implicaciones a favor de la demandante de tal cambio en su escenario pensional.

Por medio de auto del 22 de septiembre de 2022, el juzgado de conocimiento integró a la sociedad PORVENIR S.A. en calidad de litisconsorcio necesario por pasiva (expediente digital 21).

RESPUESTA A LA DEMANDA

En la contestación de Colpensiones, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante; que inició cotización al ISS en 1994; la respuesta dada por Colpensiones el 26 de marzo de 2021. No me consta los demás hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del traslado de régimen e inexistencia de la nulidad o ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el régimen de prima media, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP porvenir ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, indebida aplicación del artículo 1604 del CC; desconocimiento del precedente judicial, equivalencias del ahorro o diferencias pensionales, devolución de aportes debidamente indexados, buena fe de Colpensiones, prescripción, innominada, compensación, imposibilidad de condena en costas, condena en costas, genérica (expediente digital 12).

La sociedad PORVENIR S.A. en la contestación de la demanda indicó que no es cierto que siempre haya estado afiliada a PORVENIR S.A., porque ello lo hizo en formulario suscrito el 30 de noviembre de 2000; ni los perjuicios y el error causado por la accionada PROTECCIÓN S.A. No le constan los demás hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones previas de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe (expediente digital 26).

Por medio de auto del 6 de mayo de 2022, se dio por no contestada la demanda de la sociedad PROTECCIÓN S.A (expediente digital 17).

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 24 de febrero de 2023, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual efectuado por la demandante el 19 de abril de 1995, y los consecuentes traslados horizontales, y entender que para todos los efectos legales nunca se trasladó y por tanto siempre permaneció en el Régimen de Prima Media hoy administrado por Colpensiones.

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, traslade Colpensiones todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la accionante, incluyendo las cotizaciones completas y rendimientos financieros y sin lugar a los descuentos para el fondo de garantía de pensión mínima, prima de reaseguro de fogafín, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora que se hubiesen podido generar por el período comprendido entre el 19 de abril de 1995 y el 31 de diciembre del 2000, y por el periodo que va desde el 01 de febrero del 2002 hasta la fecha en que se realice el traslado efectivo.

CONDENÓ a PORVENIR S.A trasladará a Colpensiones en el mismo término, los descuentos que efectuó a las cotizaciones de la demandante para prima de reaseguro de fogafín, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, entre el 01 de enero del 2001 y el 31 de enero del 2002.

Las sumas por concepto de descuentos efectuados, deberán trasladarse por las administradoras debidamente indexadas, con cargo a sus propios recursos.

Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

Le ORDENÓ a Colpensiones, a recibir de PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A, los valores aludidos en el numeral anterior, y a incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral de la demandante.

Le ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A, en el caso en que haya recibido el bono pensional en el que estarían representadas las cotizaciones al RPM del demandante, restituirlo a la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad proceda con su anulación.

Condenó en costas a cargo de las codemandadas PROTECCIÓN Y PORVENIR SA, por partes iguales. Sin costas a cargo de Colpensiones.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de PORVENIR S.A. apela la sentencia solicita revocar la sentencia en primer lugar, porque considera que el traslado horizontal realizado a PORVENIR S.A. fue válida, el cual estuvo precedido de una asesoría clara, completa veraz y oportuna con la información necesaria; no se dan los presupuestos necesarios para declarar la ineficacia de la afiliación al RAIS, porque la demandante durante el tiempo de vinculación a ese régimen, tuvo todas las posibilidades de conocer las características y condiciones; la línea jurisprudencial de la ineficacia del traslado por falta al deber de información, se aplica de manera diferenciada y en el presente caso no se dan porque la demandante se afilió en forma libre, voluntaria e informada; la accionada cumplió con cargas que tenían al momento de la afiliación y la información que se impone se impuso posteriormente.

Solicita se estudie el interrogatorio de parte, del que se extrae que la demandante conocía las características del RAIS y conto con posibilidad de regresar a Colpensiones antes de cumplir 47 años; para la fecha de la afiliación no existía la obligación de informar por escrito, sin que se pueda exigir a los fondos el deber de asesoría y buen consejo para desincentivar a los usuarios a su afiliación ello se generó con la expedición del Decreto 2555 de 2010, Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015; la decisión de solicitar la ineficacia, se deriva del monto de la mesada pensional lo que no es suficiente para dar por probada la falta del deber de información.

En segundo lugar, respecto a los gastos de administración, sostiene que tiene una destinación específica regulada en art 20 de la Ley 100 de 1993, los cuales no se deben porque en el periodo de afiliación, se cumplió con la finalidad del aseguramiento de invalidez y muerte y fue invertido conforme a la ley. La Superfinanciera ha considerado que se debe respetar las restituciones mutuas que se han realizado y no se debe ordenar el traslado del seguro previsional ni las cuotas de administración; conforme el art 1746 del CC es necesario acreditar el descuento de las restituciones mutuas a que haya dado lugar

independiente del motivo que da lugar a la ineficacia, debiendo ser reconocido al fondo de pensiones los gastos de administración por haber generado rendimientos e incrementado los recursos de la demandante y tiene derecho a una compensación económica, si no se acceder a ello generaría un enriquecimiento sin causa a Colpensiones; se opone a la decisión de trasladar los rendimientos (que ya se trasladaron) junto con los gastos de administración; la Corte ha manifestado que la ineficacia implica genera que el negocio no se celebró, por lo hace que los frutos dados por la administración de los recursos no se generaron; dichos rendimientos ponen a la demandante en condiciones diferentes pues de haber permanecido en el Régimen de Prima Media y que no se generarían allí.

Igualmente se opone a la indexación ordenada, con el traslado de los rendimientos (que ya se trasladaron a PROTECCIÓN S.A) se compenso el poder adquisitivo de la moneda y condenar a trasladar rendimiento e indexación generan una condena doble.

Y solicita sea revocada la condena en costas, porque la accionada actuó de buena fe y conforme a las normas vigentes.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. manifiesta que la figura de reaseguro es un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora pasa a ser asegurado de otra entidad aseguradora - reaseguradora, contrato que no se configuró durante la vigencia de la afiliación de la parte demandante a PROTECCIÓN S.A., por lo que no hay efecto alguno que retrotraer para el caso concreto; que no existen en los cobros realizados por Protección, como gastos de administración a título de reaseguros durante la vigencia de la afiliación de la parte demandante, por ser una figura distinta a la establecida en el art. 20 de la Ley 100 de 1993.

Por su parte, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN es una autoridad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de proteger los ahorros de los ciudadanos depositados en bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades

especializadas en depósitos electrónicos (SEDPEs) que, por obligación, están inscritos en FOGAFÍN, dicho Fondo fue creado en 1985 para enfrentar la crisis financiera, años más tarde, FOGAFÍN estuvo en el centro de la solución de la crisis financiera de finales de los noventa y para ese entonces ejecutó el programa de salvamento del Gobierno Nacional focalizado en atender las dificultades que afrontaban los establecimientos de crédito y los ahorradores del sistema; resalta que FOGAFÍN surge a partir del art. 99 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, el seguro de Depósitos que es manejado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, se encuentra regulado en la actualidad por la Resolución 05 de 2009, norma que derogó la regulación anterior contenida en la Resolución 01 de 2009. La Resolución 1 de 2009 derogó, a su turno, las Resoluciones 1 de 1988, 2 de 1989, 2 de 1991, la 2 de 1992, 2 de 1993, 2 de 1996, 1 de 1997, 1 de 1998, 2 de 2000, 5 de 2000, 3 de 2001, 2 de 2005, 1 de 2006, y los numerales I y II y el Anexo I de la Circular Externa número 007 de 2002 , y no obstante la derogatoria de la Resolución 01 de 2009, el párrafo del art. 20 de la Resolución 05 de 2009 dispone que dicha Resolución 01 continuará rigiendo para efectos de la devolución de primas y cobro de prima adicional de los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las sociedades de capitalización, correspondientes al año 2009, y para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos relacionados con ellas, por lo tanto, en ningún contenido de dicha resolución, se mencionan las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y en el art. 163 de la Ley 1450 de 2011, se dispuso la eliminación de la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las Aseguradoras de inscribirse en el FOGAFÍN, ordenando además el traslado de las reservas existentes al Tesoro Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas.

Con fundamento en lo anterior, en caso de una eventual sentencia donde se ordene a PROTECCIÓN el traslado a Colpensiones, se estaría ordenando un concepto derogado y que nunca se descontó de la cotización a pensión de los afiliados.

Retoma apartes de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, en donde se determinó la improcedencia del pago por concepto de aportes al fondo de solidaridad pensional. Y concluye diciendo que Colpensiones tampoco sería el destinatario legítimo del pago realizado por dichos conceptos, comoquiera que el mismo está administrado por el Ministerio del Trabajo (entidad completamente ajena e independiente al Régimen de Prima Media) y como lo dijo la Sala, los conceptos en este fondo son obligatorios independiente del Régimen Pensional, por lo que lo jurídicamente preciso comportaría solicitar al Fondo de Solidaridad Pensional el pago de aportes para proceder a pagarlos a Colpensiones, y posteriormente que Colpensiones procediera a cancelarlos nuevamente al Fondo de Solidaridad Pensional; otra cosa, implicaría un enriquecimiento sin causa de Colpensiones en contraprestación de un empobrecimiento injustificado de Protección S.A. por cuanto los aportes corresponden a un tercero completamente ajeno (Ministerio del Trabajo), al cual le es indiferente el Régimen Pensional del afiliado en cuestión para efectos del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional.

La apoderada de Porvenir S.A se aparta de los argumentos dados en primera instancia y que justifican la ineficacia del traslado, teniendo en cuenta que PORVENIR S.A. al momento del traslado de régimen, cumplió con su deber de información, establecido en el art. 97 del Decreto 663 de 1993 al realizar la entrega de la información necesaria y obligatoria en el formulario de afiliación, el cual es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. La parte demandante contó con varias oportunidades para realizar el traslado lo que deja ver el interés de permanecer en el RAIS. La parte demandante manifestó que su motivación para iniciar este proceso, es la diferencia en la mesada pensional, por lo tanto, la ineficacia del traslado no reposa en la forma en cómo este se produjo, sino en el incumplimiento de las expectativas en el monto pensional, motivación que no es reconocida por la Corte Suprema de Justicia porque no puede predicarse un engaño. Así mismo señala que la sociedad accionada ha hecho campañas masivas para la educación del consumidor financiero y comunicados de prensa informando cambios normativos; que los documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte accionante el cual surgió con la Circular 016 de 2016 de la

Superintendencia Financiera; que la obligación del buen consejo, la doble asesoría y desincentivar la afiliación, son obligaciones posteriores que surgieron a partir del año 2010 y 2014 y ello fue objeto de pronunciamiento en las sentencias SL 1688, SL 1689 y SL 3464 de 2019; el incumplimiento de la parte accionada del deber de diligencia y cuidado, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, lo anterior queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante, al haber manifestado en el interrogatorio de parte, que no realizó comparaciones con otros Fondos Pensionales, no hizo preguntas o indagaciones en el momento de suscripción del formulario y no hizo uso de los diferentes canales de atención al usuario pero conocía la posibilidad de trasladarse a Colpensiones antes de los 47 años de edad y realizó los tramites para ello aunque no los concluyó; las condiciones del Régimen de Ahorro Individual, no son impuestas sino que se encuentra en la Ley 100 de 1993 por lo tanto, la ignorancia o desconocimiento de esta no sirven de excusa.

Y frente a la devolución a Colpensiones los descuentos que efectuó Porvenir de las cotizaciones de la demandante para prima de seguro y reaseguro Fogafin, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora entre 01/01/2001 y el 31/01/2002 y que las sumas se trasladen en forma indexada con cargo a sus propios recursos, considera que debe ser revocada por lo antes expuesto, pero en caso de confirmarse la condena y declarar la ineficacia de la afiliación, solicita no se condene al traslado en forma indexada las cuotas de administración, el valor de las primas Fogafin y las sumas adicionales de las aseguradoras, ya que los gastos de administración es un concepto que tiene por mandato legal destinación específica conforme el art. 20 de la Ley 100 de 1993 y dicho descuento ha cumplido a cabalidad y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, así mismo, atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa; toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, y de acuerdo con la coyuntura económica, se debe hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, como se analizó por el Tribunal Superior de Medellín en sala

extraordinaria del 14 de agosto de 2019. Y resalta el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000. Y en primas instancia se condena al traslado de los rendimientos generados en la cuenta de ahorro individual, pero como los efectos jurídicos que se causan tras la declaratoria de ineficacia son los propios del concepto de las restituciones mutuas, no es posible la condena a una indexación de los valores ordenados a trasladar.

Considera improcedente las costas procesales, dado que la entidad obró con buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales y buscando el beneficio de la parte demandante.

Y la apoderada de Colpensiones solicita la revocatoria de la sentencia, sustentando sus alegatos en un recuento normativo, resaltando la libre escogencia del régimen pensional consagrado en el art. 13 de la Ley 100 de 1993; la aplicación del Decreto 663 de 1993 el cual aplica como regulación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales hacen parte del sistema como instituciones financieras privadas de carácter previsional, encargadas de administrar eficientemente los fondos y planes de pensión y cesantías; en el Art. 97 evidencia la importancia del deber de informar al consumidor financiero; el art. 5º del Decreto 692 de 1994 establece que las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo; y solo es con la Ley 1749 de 2014 que se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros. Lo anterior, para decir, que, en el caso concreto, la demandante se trasladó de régimen el 14 de junio de 1994, en vigencia del Decreto Ley 663 de 1993, cuando solo se exigía atender el formulario con el lleno de los requisitos, por lo que imponer cargas adicionales se constituye en una situación imposible. Solo para con la Ley 1748 de 2014 se establece la obligación de brindar asesoría transparente a los consumidores de los servicios financieros y diferentes niveles de intensidad del deber de información y en este caso, el traslado de la demandante y selección del Régimen de Ahorro Individual se dio el 19 de abril de 1995 en vigencia del Decreto 663 de 1993, en donde se exigía diligenciar el formulario con el lleno de los requisitos, para demostrar la aceptación y consentimiento.

Adicionalmente, el entendimiento de los regímenes pensionales sugiere la existencia de una debida asesoría, sin que ello pueda interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones del caso en concreto ni que se invierta la carga de la prueba; tampoco se puede desconocer la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante, entre otros aspectos, que le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Lo anterior genera que la carga probatoria debe de estar a cargo de la parte demandante, porque la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación y en el interrogatorio de parte aseguró que no fue obligada a efectuar su traslado; del interrogatorio de parte absuelto por la parte accionante se extrae, que nadie la obligó a efectuar su traslado al Régimen de ahorro individual, sino que el mismo lo realizó de manera voluntaria.

En caso de ser confirmada la decisión, solicítase ordene en forma clara que la accionada PROTECCIÓN S.A., deberá trasladar a Colpensiones, la totalidad de los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación tales como, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, cuotas de administración indexadas, el porcentaje de garantía de pensión mínima y el traslado de los reaseguros y seguros previsionales, conforme ha sido señalado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 17595 de 2017, SL 4989 de 2018 y SL 1689 de 2019 entre otras.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en virtud del **recurso de apelación** i) Si en el presente caso hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a revocar la orden dada a PORVENIR S.A. de trasladar gastos de administración, prima de seguros previsionales, la indexación y las costas procesales.

En el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar; i) Si hay lugar a aclarar los conceptos que conforman los gastos de administración.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante no es beneficiaria del régimen de transición, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 35 años de edad al haber nacido el 11 de junio de 1973 (fl 20 del expediente digital 01); cotizó al ISS desde el 10 de agosto de 1994 al febrero de 1995 (expediente digital 13); solicitó traslado a PROTECCIÓN S.A. el 19 de abril de 1995, posteriormente solicitó traslado a PORVENIR S.A. el 30 de noviembre de 2000 y retornó a PROTECCIÓN S.A el 19 de diciembre de 2001.

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que la primera afiliación realizada fue en 1994 cree que fue a la sociedad PROTECCIÓN S.A.; no recuerda haber firmado formulario de afiliación al ISS, sabía que estaba afiliada al ISS pero no recuerda haber firmado nada; en agosto de 1994 no recuerda a donde indicó que le debían realizar los aportes a pensiones, se acuerda que existía PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y el ISS; se afilió a PROTECCIÓN S.A. en abril de 1995 porque empezó a trabajar en SERVIFERIA pero no recuerda si le presentaron el formulario de afiliación ni lo explicado, recuerda que más adelante lo de PROTECCIÓN S.A. se dio cuando el tema de pasarse porque era el aporte primado, y eso fue aproximadamente en 1996-1997 y fue la asesoría cuando todo el mundo se pasó para los fondos privados; se trasladó a PORVENIR S.A. en el año 2000 cuando estaba trabajando en Orbitel, y en esa oportunidad le dieron una asesoría en donde le mostraron los beneficios de pasarse al fondo privado y el aporte voluntario; los beneficios de los que le hablaron fueron las proyecciones, el ahorro, la inversión, los montos y eso le llamó la atención; las proyecciones eran de la mesada pensional y el ahorro porque ahí podrían aportar para la pensión y ahorrar voluntario; ella no realizó aportes voluntarios; no le hablaron de la devolución de saldos, ni los rendimientos financieros; y regresó a PROTECCIÓN S.A. porque era del grupo de Sura y tenían las cesantías y por eso todo lo trasladó a ese fondo, en ese momento no recibió asesoría de su pensión; posteriormente no se le ha brindado asesoría por PROTECCIÓN S.A. ni PORVENIR sobre su situación pensional; la doble asesoría ella la solicitó en el 2019 a Colpensiones y a PROTECCIÓN S.A., de esta última recibió la asesoría y Colpensiones en comunicación le dijo que se acercara a las oficinas en enero de 2020 y cuando fue se cayó el

sistema y le dijeron que regresara pero después se cerró el país por la pandemia sin que haya recibido información adicional de Colpensiones, no recuerda cuando fue la asesoría de PROTECCIÓN S.A. si finales de 2019 o inicios de 2020; para la fecha en que recibió la asesoría de PROTECCIÓN S.A. no había cumplido los 47 años y por eso fue que inició el proceso para hacer el traslado; ella tenía interés de retornar a Colpensiones antes de cumplir la edad y su interés de traslado es porque en Colpensiones puede tener una mejor pensión, ello lo conoció de personas que manejan el tema y de una asesoría que tiene en la empresa; no le hablaron del bono pensional. No recuerda haber tenido asesoría de un asesor de PORVENIR S.A, sino de PROTECCIÓN S.A, aclara que la asesoría de la que habló, fue brinda por la empresa y como consecuencia de esa asesoría se afilió a PORVENIR S.A.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección*

*de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...” no solo a la multa sino que dice en forma expresa “... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”, o sea que se refiere a una ineficacia.*

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...”.** (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene

que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indico que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencia STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A (entidad que realizó el traslado de régimen pensional), no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse a dicho fondo de pensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se violenta el **derecho de libertad de selección** del

régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvo efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles (sentencia SL 3202 de 2021 que remite a las sentencias SL 1688 de 2019, SL 12715 de 2014, 28.479 de 2008, 39.347 de 2012 y 8397 de 1996) y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Sin que exista prueba de la información completa y suficiente al momento de trasladarse de ISS al Régimen de Ahorro Individual, al haberse dado por no contestada la demanda.

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual efectuado por la demandante el 19 de abril de 1995, y los consecuentes traslados horizontales, así como la orden dada a PROTECCIÓN S.A de trasladar a Colpensiones todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la accionante, incluyendo las cotizaciones completas y rendimientos financieros y sin lugar a los descuentos para el fondo de garantía de pensión mínima, prima de reaseguro de fogafín, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora que se hubiesen podido generar por el período comprendido entre el 19 de abril de 1995 y el 31 de diciembre del 2000, y por el periodo que va desde el 01 de febrero del 2002 hasta la fecha en que se realice el traslado efectivo, y que las sumas por concepto de descuentos efectuados, deberán trasladarse debidamente indexadas, con cargo a sus propios recursos.

2. De los efectos de la ineficacia

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes¹:

¹ Sentencia SL 3051 del 7 de julio de 2021, engloba la obligación de trasladar todos los conceptos, al señalar: “Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga

1º. Capital ahorrado: Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

2º. Rendimientos: En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

3º. Los gastos de administración, encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: *“... el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”*, traslado que tiene sustento en lo siguiente:

En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al Régimen de Ahorro Individual, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada

las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”

durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

*En tal sentido, **se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.**” (Resalto fuera del texto)*

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN** de las cuotas de administración, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Conceptos que no prescriben teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021.

4º. Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima: el traslado de estos aportes se encuentra igualmente consagrado en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 porque al tratarse de un aporte propio del Régimen de Ahorro Individual, no encuentra un equivalente en el Régimen de Prima Media, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al Régimen de Prima Media bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016; traslado que tiene como sustento jurisprudencial la sentencia SL 2877 de 2020.

Para concluir, en sentencia reciente SL 3051 del 7 de julio de 2021, se engloba la obligación que tienen las entidades del Régimen de Ahorro Individual de trasladar los conceptos referidos anteriormente, al señalar: *“Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar*

al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021)."

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el **principio de sostenibilidad financiera** no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

"Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas."

Teniendo claro lo anterior, se ACLARA que los gastos de administración están constituidos como anteriormente se explicó por *"gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes"*.

3. En relación a la absolución de la indexación, por considerar PORVENIR S.A. que se realiza una doble condena, dado que se están trasladando los rendimientos financieros

Esta Sala es de la posición que se tratan de conceptos totalmente diferentes, toda vez que los rendimientos financieros se generan por las inversiones realizadas por el fondo, en un período establecido, y dichos rendimientos pueden presentar una desvalorización en su rentabilidad en virtud de la volatilidad del mercado, lo que puede generar afectación las cuentas de ahorro

individual individuales, por lo tanto, al tener derecho al traslado, éstos conceptos deberán ser actualizado al momento del pago, y así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en sus precedente jurisprudencial, tal y como son las sentencias SL 1688, SL 1689 de 2019, SL 782, SL 1187 y SL 1197 de 2021.

4. De la condena en costas impuesta en primera instancia.

Se CONFIRMARÁ dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: “1. Se *condenará en costas a la parte vencida en el proceso...*”, y en este evento, las pretensiones de la demanda salieron avante.

Frente a los demás aspectos alegados por la AFP Protección S.A, no se hará un pronunciamiento, teniendo en cuenta que el principio consonancia establecido en el art. 66A del CPT y SS establece “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, **deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación**” (resalto fuera del texto).

Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de PORVENIR S.A. por ser desfavorable el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia, **ACLARANDO** la sentencia, en el sentido que los gastos de administración están constituidos por “*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.*”.

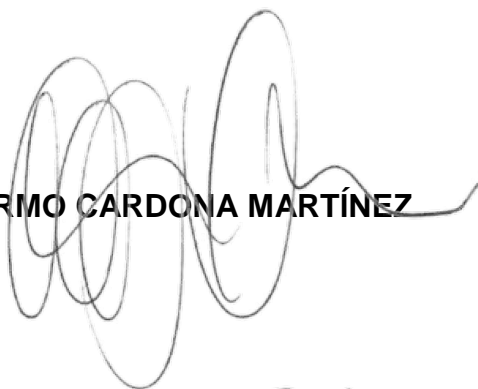
SEGUNDO: Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de PORVENIR S.A. por ser desfavorable el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : SANDRA VICTORIA SIERRA ESCOBAR
DEMANDADO : : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES
LITISCONSORCIO NECESARIO: PORVENIR S.A.
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-025-2021-00047-01
RADICADO INTERNO : 066-23
DECISIÓN : ADICIONA, ORDENA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 24 de abril de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 24 de abril de 2023 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO